El cuarteto del terror judicial

DescripciÃ³n

armando.info
ARMANDOINFO®
EL QUE BUSC
ENCUENT

En un reciente conciliÃ¡bulo del brazo judicial del rÃ©gimen de NicolÃ¡s Maduro, encabezado unos dÃ-as antes de las elecciones presidenciales por el Fiscal General oficialista, Tarek William Saab, junto a la actual Presidenta del Circuito Penal de Caracas y exfiscal, Katherine Haringhton, se afinaron algunos detalles de la mÃ¡quina represiva que debÃa activarse apenas se consumara la proclamaciÃ³n fraudulenta de Maduro como presidente reelecto de Venezuela, que en efecto ocurriÃ³ al cierre de la jornada comicial del 28 de julio.

Con la hipÃ³tesis de trabajo de que la maniobra electo-judicial en ciernes provocarÃa protestas, los participantes se dispusieron a diseÃ±ar medidas para prevenirlas o aplacarlas. En las calles tendrÃan que desplegarse la fuerza bruta y la crueldad de los cuerpos de seguridad, cÃ³mo no, pero entre las vueltas de tuerca que se prepararon destacÃ³ la activaciÃ³n de una segunda lÃnea de ataque: los Tribunales de Terrorismo, una novedosa jurisdicciÃ³n que el chavismo-madurismo instaurÃ³ en 2012 y que, desde al menos hace tres aÃ±os, pasÃ³ a actuar como una virtual fuerza de tarea para procesar de manera expedita e implacable a cualquier persona fichada como opositora.

Desde Caracas vienen actuando durante las Ãºltimas cuatro semanas los cuatro jueces encargados de la instancia. No le han hecho ascos a su misiÃ³n; de hecho, siguen al pie de la letra un patrÃ³n comÃºn de arbitrariedades que espeluzna: niegan el acceso a los expedientes de los detenidos, a quienes procesan sin miramientos, sin posibilidad de nombrar abogados de confianza, siempre tras las rejas,

por fuera y lejos de sus jurisdicciones naturales, a veces por grupos -por lo tanto, sin considerar las circunstancias de cada caso individual- y de forma telemÃ¡tica.

Cuando hace algunos aÃ±os el venezolano Carlos Armando Figueredo tradujo *Los Juristas del Horror*, el clÃ¡sico de Ingo MÃ¼ller sobre la justicia en la Alemania nazi, tal vez no imaginÃ³ que esa advertencia con fundamentos histÃ³ricos reencarnarÃa en su propio paÃs a travÃ©s de los jueces Carlos Liendo, Ã•ngel Betancourt, Franklin MejÃas y Joel Monjes. Un quinto juez, Edward BriceÃ±o, ha sabido hacerse de un bajo perfil a prueba de escrutinio.

Constituidos en una mÃ¡quina de terror, los cuatro jueces de esta historia forman parte de una operaciÃ³n de castigo que, segÃºn fuentes consultadas por **Armando.info**, se desarrolla bajo la conducciÃ³n remota de la magistrada Elsa GÃ³mez Moreno, desde la Sala de CasaciÃ³n Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La magistrada es cercana a Cilia Flores, esposa de NicolÃ¡s Maduro. La conexiÃ³n entre GÃ³mez Moreno y la Primera Dama o *Primera Combatiente*, como la jerga revolucionaria prefiere llamarla, pasa por la sobrina de la magistrada, Jennifer Karina Fuentes, quien fue pareja de Walter Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores.

Y no siempre es remota la instrucciÃ³n. El 3 de agosto, apenas seis dÃas despuÃ©s de las elecciones presidenciales, segÃºn dejÃ³ ver en su cuenta de Instagram, la magistrada GÃ³mez Moreno hizo un recorrido junto a Haringhton â??por los Tribunales con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con JurisdicciÃ³n a Nivel Nacional (...) con la finalidad de fortalecer los procesos que implementa cada tribunal en el desarrollo de una justicia eficienteâ?•. Una evidencia del rol clave que el rÃ©gimen ha concedido a esta jurisdicciÃ³n para sofocar cualquier revuelta en las circunstancias actuales.

armando.info

RÃ¡pido y furioso

La de los tribunales de terrorismo es una jurisdicciÃ³n armada con escasos mimbres legales por el TSJ a partir de 2012. Haciendo bueno su nombre, fue concebida para juzgar casos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo. Pero casi desde su creaciÃ³n, y especialmente ahora, ha venido estirando la acepciÃ³n clÃ¡sica de la palabra â??terrorismoâ?• -lÃ©ase, cualquier acto violento que busque generar terror en la poblaciÃ³n-, hasta llegar a una definiciÃ³n mÃ¡s amplia que comprende cualquier acto de oposiciÃ³n al rÃ©gimen de NicolÃ¡s Maduro.

La imparcialidad no es, por lo tanto, uno de los requisitos para presidir esos juzgados. Y precisamente un juez que se ufana, sin ruborizarse, de su cercanÃa con el propio Maduro es Carlos Enrique Liendo Acosta, a la cabeza del Tribunal 2Â° de Control contra la CorrupciÃ³n y el Terrorismo.

Un par de fuentes seÃ±alan que el evento que marcÃ³ un giro en la carrera del abogado Liendo Acosta, bastante gris hasta ese momento, fue su nombramiento como fiscal provisorio en la FiscalÃa 40Âª del Ã•rea Metropolitana de Caracas. ResultÃ³ todo un golpe de suerte. En esas funciones hizo migas con Katherine Haringhton, sancionada por Suiza, Reino Unido y la UniÃ³n Europea bajo seÃ±alamientos de ser â??responsable de socavar la Democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, entre otras cosas al iniciar enjuiciamientos por motivos polÃticos y no investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el rÃ©gimen de Maduroâ?•. Temprana aliada judicial del chavismo, en el rol de fiscal del Ministerio PÃºblico fue la acusadora en casos de alto perfil, como los del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de la dirigente opositora, MarÃa Corina

Machado. Hoy Haringhton se desempeÃ±a como jueza-presidenta del Circuito Penal de Caracas.

En el poco tiempo que lleva al frente del tribunal que le fue asignado, Liendo Acosta se ha ganado la fama de ser â??el mÃ¡s implacableâ?• entre sus pares de la justicia antiterrorista. De acuerdo con esa reputaciÃ³n, se le confÃan los procesos mÃ¡s sobresalientes y con mayor significaciÃ³n polÃtica. Sobre su escritorio, por ejemplo, se encuentra el caso de la llamada *OperaciÃ³n Brazalete Blanco*, por la que en 2023 supuestamente se planeaba un atentado contra NicolÃ¡s Maduro y el derrocamiento del gobierno. Las diligencias de Liendo Acosta en torno al caso han llevado a prisiÃ³n a una treintena de militares, incluyendo al capitÃ¡n Anyelo Heredia, y a la abogada y activista RocÃo San Miguel, a quien el tribunal relaciona con el presunto complot y la acusa por los delitos de traiciÃ³n a la patria, conspiraciÃ³n y, claro estÃ¡, terrorismo.

Ya durante la crisis polÃtica y de orden pÃºblico desatada por las elecciones presidenciales, Liendo Acosta arrimÃ³ el hombro para levantar un cerco judicial en torno a MarÃa Corina Machado. Por ejemplo, fue quien imputÃ³ a Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo LÃ³pez, jefes regionales del comando de campaÃ±a del partido Vente Venezuela, que Machado dirige, detenidos en enero de este aÃ±o y a cuyos abogados Liendo no ha permitido juramentarse hasta la fecha.

armando.info

TambiÃ©n los casos del periodista y dirigente vecinal, Carlos Rojas, y del dirigente del partido Voluntad Popular, Jeancarlos Rivas, estÃ¡n desde este aÃ±o en el despacho de Liendo Acosta, quien ha negado a sus defensores el acceso a los expedientes.

La confianza del rÃ©gimen en Liendo Acosta quedÃ³ de manifiesto este mismo aÃ±o cuando se le encargÃ³ procesar a los altos jerarcas del chavismo caÃdos en desgracia tras su participaciÃ³n presunta en la trama del caso *Pdvsa-Cripto*, entre ellos, el exministro y exvicepresidente de la RepÃºblica, Tareck El Aissami; SimÃ³n Zerpa, expresidente del Banco Central de Venezuela; Joselit RamÃrez, extitular de la clausurada Superintendencia Nacional de Criptoactivos; Hugbel Roa, exdiputado del chavismo; y Antonio PÃ©rez SuÃ¡rez, oficial del EjÃ©rcito y exvicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal Pdvsa.

La confianza del fiscal

Acerca de Ã•ngel Betancourt MartÃnez, documentos oficiales evidencian que desde que tenÃa 28 aÃ±os el joven juez, hoy de 36 aÃ±os de edad, estaba abriÃ©ndose un camino en la justicia venezolana, permeada por los caprichos y mandatos del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno. Entonces, en septiembre de 2017, fue designado fiscal provisorio por la ViceFiscalÃa General de la RepÃºblica, en servicio para la DirecciÃ³n de Delitos Comunes de la CircunscripciÃ³n Judicial del estado Vargas (hoy La Guaira).

Poco despuÃ©s, en enero de 2018, desde la FiscalÃa 59 del Ministerio PÃºblico con Competencia Nacional, tuvo su primera gran actuaciÃ³n de corte polÃtico al solicitar el inicio de las diligencias de extradiciÃ³n desde EspaÃ±a de Rolando JosÃ© Figueroa MartÃnez, militante de Voluntad Popular.

En noviembre de ese mismo aÃ±o fue nombrado fiscal con competencia nacional. Dos fuentes consultadas seÃ±alan que, como fiscal, Betancourt resultÃ³ un funcionario muy eficiente para la causa chavista y que asÃ entrÃ³ a formar parte del cÃrculo de confianza de Tarek William Saab, lo que le catapultÃ³ en 2023 como titular del Tribunal de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del

Ã•rea Metropolitana de Caracas. Las mismas fuentes aseguran que fue Saab quien lo postulÃ³ poco antes de las elecciones del 28 de julio para estar al frente del Tribunal Tercero de Control para el Terrorismo, previendo que allÃ fuera de mayor utilidad para la causa madurista.

Al apenas pisar el tribunal de terrorismo, Betancourt empezÃ³ a actuar con rapidez y cierta perfidia; pero, al mismo tiempo, tuvo que abandonar su relativo anonimato. Al menos una denuncia en medios ya lo dejÃ³ expuesto recientemente ante el pÃºblico: una ciudadana, Enma Mendoza, relatÃ³ a reporteros del portal *El Pitazo* que su hermano, Pedro Antonio Mendoza, habÃa sido blanco de una imputaciÃ³n exprÃ©s emitida desde Caracas por Betancourt, quien le asignÃ³ un defensor pÃºblico y ordenÃ³ mantenerlo preso en la comandancia de la policÃa del estado Portuguesa, en los Llanos Occidentales de Venezuela, mientras se resuelve su eventual pase a juicio.

El indiciado, Pedro Antonio Mendoza, ayudante de albaÃ±ilerÃa, fue detenido en Guanare, la capital de esa provincia, durante la tarde del 29 de julio. Un grupo de personas, que protestaba contra los resultados de la elecciÃ³n presidencial anunciados la madrugada anterior por el Consejo Nacional Electoral (CNE), derribÃ³ una estatua de Coromoto, el cacique aborigen local ante quien, segÃºn la tradiciÃ³n, en 1652 se habrÃa aparecido la Virgen, actual patrona de Venezuela. En el hecho, fuerzas policiales detuvieron a varios manifestantes y a transeÃºntes ocasionales; Pedro Antonio, asegura la familia, era uno de estos Ãºltimos.

armando.info

El marco para la persecución

Desde 2012 la autodenominada "Revolución Bolivariana" ha preparado un camino legal y jurídico sobre el que hoy castiga judicialmente a la disidencia política

2012 30 de Abril

armando.info

Se aprueba la **Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.**

2012 17 de Octubr

Sala Plena del Tribunal Sup de Justicia crea los tribuna terrorismo mediante resol Nº 2012-0026.

2017 08 de Noviembre

Se publica en Gaceta Oficial la Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, aprobada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente de ese año.

2019 27 de Novien

La Sala Plena del Tribunal S de Justicia crea los Tribu Especiales de Primera Insta Sala Especial de la Corte S para procesar la responsab adolescentes en casos imputaciones vinculado terrorismo.

2020 27 de Febrero

Un alguacil con agallas

Hasta el aÃ±o pasado muy poco se sabÃa de Franklin MejÃas Caldera, Juez 4Â° de Control con Competencia en Terrorismo, pero algunas fuentes seÃ±alan que, con apenas 38 aÃ±os, alcanzÃ³ esa cota gracias al patrocinio y tutela de Katherine Haringhton.

La memoria que de MejÃas ha quedado en los pasillos del Palacio de Justicia en Caracas corresponde mÃ¡s a la Ã©poca en la que se desempeÃ±aba como alguacil, el funcionario que en los tribunales se encarga de la recepciÃ³n y distribuciÃ³n de documentos. TambiÃ©n fue secretario, hasta que llegÃ³ a juez.

MejÃas Caldera sustituyÃ³ en el Tribunal 4to de Terrorismo a su anterior titular, JosÃ© Macsimino MÃ¡rquez, reconocido hasta entonces como uno de los jueces mÃ¡s severos del chavismo. Entre otros casos, MÃ¡rquez dictÃ³ las condenas del dirigente del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, asÃ como tambiÃ©n del periodista y activista polÃtico, Roland CarreÃ±o. Fue ejecutor de las medidas mÃ¡s duras contra la presa polÃtica Carla Da Silva, vinculada a la *OperaciÃ³n GedeÃ³n*, y ordenÃ³ prolongar la detenciÃ³n de 12 indÃgenas pemones implicados en ataques a dos bases militares en el estado BolÃvar en 2019; uno de estos, Salvador Franco, fallecerÃa por falta de atenciÃ³n mÃ©dica. A pesar de tantos favores para el rÃ©gimen, Macsimino MÃ¡rquez fue detenido en marzo de 2023 por la PolicÃa Nacional contra la CorrupciÃ³n como parte de un operativo contra la corrupciÃ³n ordenado por Maduro.

armando.info

En lÃnea con esos estÃ¡ndares, el sucesor de MÃ¡rquez en el juzgado, Franklin MejÃa, despachÃ³ en 2023 dos casos con mucha resonancia polÃtica: el del estudiante John Ã•lvarez, militante del partido Bandera Roja, y el de Roberto Abdul, presidente de la organizaciÃ³n SÃºmate, fundada por MarÃa Corina Machado.

John Ã•lvarez, estudiante de AntropologÃa en la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue detenido el 30 de agosto de 2023 por funcionarios de la PolicÃa Nacional Bolivariana (PNB), que lo mantuvieron al menos 24 horas en desapariciÃ³n forzosa. Ã•lvarez fue vinculado al caso de seis sindicalistas de Guayana condenados a 16 aÃ±os de cÃ¡rcel por liderar una protesta de empleados pÃºblicos en rechazo al ajuste salarial, aÃºn mÃ¡s a la baja, impuesto tras la aplicaciÃ³n de un nuevo tabulador de salarios dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto. Aquellas protestas fueron calificadas como â??subversivasâ?• y â??parte de una conspiraciÃ³nâ?• por parte de la FiscalÃa.

Joel GarcÃa, el abogado de Ã•lvarez, denunciÃ³ en esa oportunidad que su cliente fue torturado con descargas elÃ©ctricas y golpes, y sometido a amenazas con arma de fuego para incriminarse. La acusaciÃ³n contra Ã•lvarez se basÃ³ sobre el relato de un informante anÃ³nimo presentado por el Ministerio PÃºblico de Tarek William Saab, el fiscal designado por la Ãrrita Asamblea Constituyente de 2018. Esa declaraciÃ³n fue admitida sin objeciones por el juez MejÃas, quien considerÃ³ procedente la informaciÃ³n de un *patriota cooperante*, como la neolengua del chavismo denomina a sus soplones.

Sobre esa base se llevÃ³ a juicio al joven de 24 aÃ±os, a la postre sentenciado a 16 aÃ±os de prisiÃ³n. Sin embargo, Ã•lvarez pasarÃa solo cuatro meses en la cÃ¡rcel. El 24 de diciembre de 2023 saliÃ³ del cautiverio en el marco del intercambio de prisioneros pactado entre Washington y Caracas que tambiÃ©n beneficiÃ³ a Alex Saab, el proveedor favorito de Maduro, quien hasta entonces completaba un poco mÃ¡s de dos aÃ±os esperando en una prisiÃ³n de Miami por un juicio.

Por su parte, el presidente de la asociaciÃ³n civil SÃºmate, Roberto Abdul, fue detenido el 6 de diciembre de 2023 y estuvo en situaciÃ³n de desapariciÃ³n forzada por mÃ¡s de 48 horas. En aquel momento, el director de la organizaciÃ³n Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, hizo saber que Abdul habÃa sido presentado en una audiencia â??a escondidasâ?• ante el Tribunal 4Â° de Control con Competencia en Terrorismo, del juez Franklin MejÃas, que se llevÃ³ a cabo en las instalaciones de El Helicoide, la construcciÃ³n de los aÃ±os 50 en el suroeste de Caracas que la policÃa polÃtica convirtiÃ³ en su sede y centro de reclusiÃ³n y torturas. AllÃ fue acusado de traiciÃ³n a la patria, conspiraciÃ³n, legitimaciÃ³n de capitales y asociaciÃ³n para delinquir.

Abdul fue liberado el 20 de diciembre 2023, tambiÃ©n como parte del grupo de presos polÃticos excarcelados a raÃz del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela.

Al momento de cerrar esta ediciÃ³n, circulaban rumores segÃºn los cuales MejÃas habrÃa sido retirado sÃºbitamente del cargo. El abogado y exfiscal, Zair Mundaray, que el 23 de agosto se hizo eco de esas versiones en su cuenta de la red X, antes Twitter, dijo a los reporteros de **Armando.info** que desconocÃa las razones de la posible destituciÃ³n.

armando.info

Sin consideraciÃ³n para los menores de edad

Salvo algunas excepciones, los familiares de los detenidos en el marco de las protestas acaecidas tras el fraude electoral hablan muy poco con la prensa. El miedo ante la incertidumbre, asÃ como frente a la absoluta discrecionalidad que los jueces de los tribunales de terrorismo ejercen sobre los destinos de sus familiares, ha creado un halo casi impenetrable de silencio. AÃºn mÃ¡s cuando los detenidos son menores de edad.

A pesar de esos obstÃ¡culos, para esta historia se pudo confirmar la existencia de un hasta ahora ignoto Tribunal de Control de Responsabilidad Penal de Adolescentes en Materia de Terrorismo, a cargo del juez Joel Abraham Monjes, de 58 aÃ±os y con larga trayectoria dentro del Poder Judicial en roles de fiscal, vicefiscal y defensor pÃºblico, siempre relacionado con el Ã¡rea penal y de delitos comunes.

A diferencia de los otros jueces nombrados para procesar delitos de terrorismo, Monjes no se ha apuntado todavÃa ningÃºn punto a su favor por la gestiÃ³n de un caso de importancia. De hecho, personas que lo conocen y confirman su nombramiento en esa instancia, al hablar con **Armando.info** se mostraron sorprendidas por que Monjes haya aceptado esa â??ingrata tareaâ?•.

â??En la fiscalÃa tuvo una actuaciÃ³n siempre ajustada a derechos y garantÃas. No se le conocieron acciones de corrupciÃ³n o de Ãndole parecidaâ?•, dice un colega que conoce su trayectoria. Otro fue aÃºn mÃ¡s allÃ¡: â??Era un defensor pÃºblico muy apreciado (...) no me explico quÃ© hace allÃ. Ni es ignorante, ni lo tengo por mala persona. Tampoco lo tengo por chavistaâ?•.

A pesar de esos testimonios atenuantes, la madre de un menor detenido confirma que Monjes no ha tenido problema en acogerse al patrÃ³n de la criminalizaciÃ³n de la protesta. No permite a los acusados la designaciÃ³n de defensores propios y les deja ver a sus parientes apenas dos veces a la semana. La gota que ha rebasado la angustia de los padres es que el despacho de Monjes se declarÃ³ en â??receso judicialâ?• hasta el 15 de septiembre, aÃºn cuando la jurisdicciÃ³n en materia penal no

cuenta con tal prerrogativa.

Mientras el tiempo corre para todos los presos polÃticos, el rÃ©gimen de NicolÃ¡s Maduro parece haber disminuido, mas no cesado, el empuje represivo con el que pretende aterrorizar y desmovilizar las manifestaciones en su contra. Hasta el cierre de esta ediciÃ³n, la organizaciÃ³n Foro Penal Venezolano ha identificado un total de 1.674 (107 adolescentes) detenidos durante el Ãºltimo mes y que encajan en la categorÃa de presos polÃticos. â??El mayor nÃºmero de presos polÃticos conocido en Venezuela, al menos en el siglo XXIâ?•, afirmÃ³ la organizaciÃ³n en un mensaje de su cuenta en X.

De ellos, un nÃºmero incierto, pero seguramente mayoritario, se encuentra haciendo fila para ser procesado por la mÃ¡quina del terror judicial que el rÃ©gimen de NicolÃ¡s Maduro puso en marcha.

Fecha de creaciÃ³n
2024/08/25

armando.info